



[4-5] POLÍTICA

Masivo paro y movilización contra los ajustes y despidos

» Convocadas por ATE Nacional, miles de personas se sumaron a la movilización a Plaza de Mayo en rechazo

a las medidas del gobierno nacional. Los trabajadores de Tiempo, junto al Sipreba, acompañaron el reclamo.

[3] ACTUALIDAD

El ministerio de Trabajo estira el conflicto

Dilata la entrega de los Repros y se niega a dar informes sobre la presunta venta del diario.

[6-7] ESPECIALES

Diálogos en la redacción

Damián Loreti y Graciana Peñafort, impulsores de la ley de Medios, en Tiempo Argentino.



[8] SOCIEDAD

Conflictos con tierras indígenas

Según Amnistía Internacional, en el país ya hay 200.

Boletín | Número 19

ENCUENTRE A LOS DEUDORES

Inseguridad: encuentre a tres ladrones de guante blanco en el microcentro.



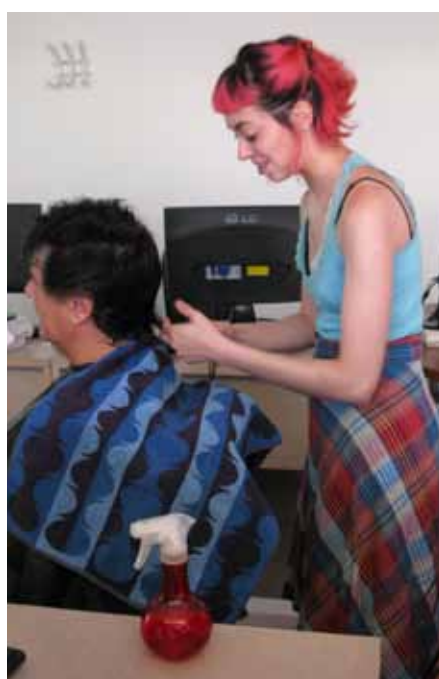
FRAGMENTADOS

¿Quién es el empresario multimillonario de la foto?



Más gestos de solidaridad

Lucía, la hija de nuestra compañera Mónica López Ocón, aportó un gesto de solidaridad inédito. Llegó hasta la redacción del diario con sus tijeras y mejoró el "estilo" de los trabajadores y trabajadoras de Tiempo Argentino con sus generosos cortes de pelo. Se sabe, la elegancia es lo último que se pierde.



Una buena cantidad de pañales y alimentos no perecederos (arroz, latas de tomates, fideos, conservas etc) llegaron anoche al edificio de Tiempo Argentino y Radio América gracias a una donación del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores). El aporte solidario se suma a otros que aportarán a la canasta familiar de los compañeros que llevan casi tres meses sin cobrar.

La empresa Nestlé sorprendió ayer por la mañana con una donación de cajas que contenían 36 frascos de café instantáneo Nescafé, 36 paquetes de Nesquik y 24 de leche en polvo Svelty que estarán a disposición de los trabajadores. El envío promete alimentar los desayunos y las meriendas para continuar la lucha.



Hace ya dos semanas que el Ministerio de Trabajo, a través del mediador, Gustavo Ortolano, suspendió abruptamente la aplicación de una multa millonaria al Grupo M Deluxe de Mariano Martínez Rojas por incumplimiento en el pago de los salarios de los trabajadores de Tiempo en nombre de una contraorden “proveniente desde Alem” inspirada en una supuesta nueva operación comercial en curso que no deseaban “entorpecer”, aplicando multas que “no beneficiarían a los trabajadores”.

Desde el primer momento, los funcionarios de segunda línea del ministerio se mostraron reticentes a ofrecer más detalles sobre el supuesto interesado en comprar nuevamente el diario. Corría el jueves 11 de febrero y la operación, aseguraron, se realizaría “entre el lunes o el martes”. Nada de eso ocurrió y, por ese motivo, los trabajadores se movilizaron a la sede de Alem el viernes 19 a pedir explicaciones a las autoridades políticas de la cartera laboral.

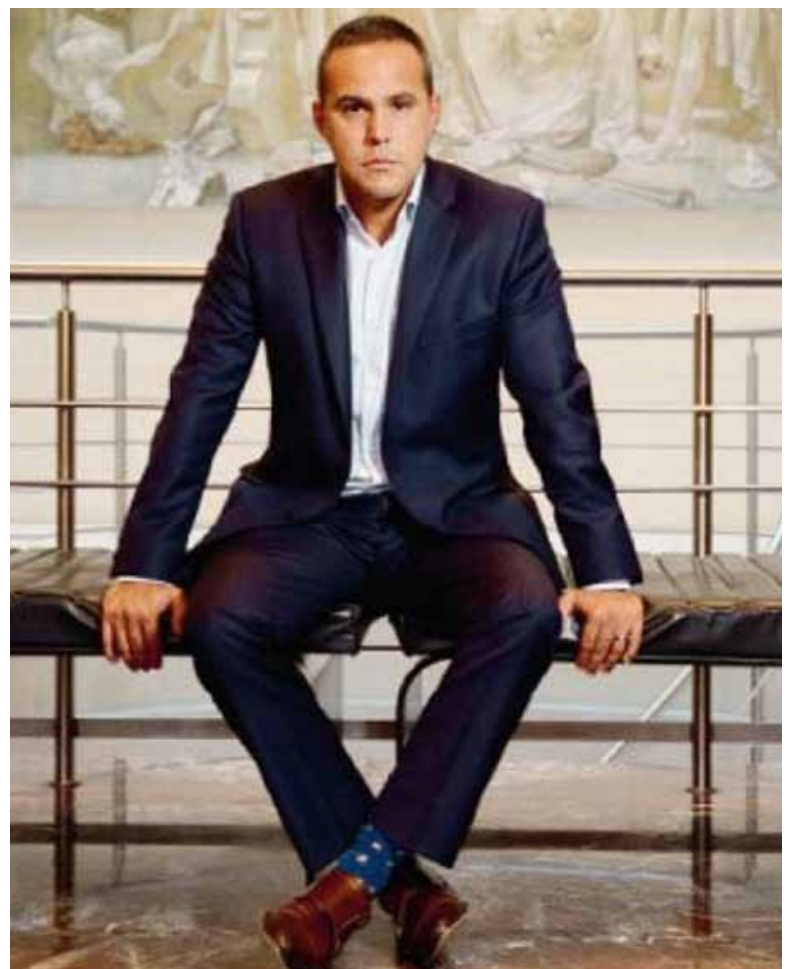
Luego de varias dilaciones, un corte de la Avenida Alem y varias horas de espera, fueron atendidos por Silvia Squire, Directora de Relaciones Laborales y tercera en la línea de mando del organismo, quien ratificó la teórica existencia de una operación, mantuvo el hermetismo con relación a los supuestos compradores y recogió, nuevamente, el insistente reclamo de Repros por parte de los trabajadores comprometiéndose a dar una respuesta para el lunes siguiente.

La dilación de la supuesta operación comienza a despertar sospechas entre los trabajadores de que se trata de otra maniobra para profundizar le desgaste y las desmoralización y demorar un desenlace favorable a los trabajadores, ahora con el aval de la cartera laboral. En estas condiciones, y a esta altura, la política del gobierno frente al conflicto va girando hacia el encubrimiento y la funcionalidad con relación a los vaciadores. Por eso, en la última audiencia en la que Mariano Martínez Rojas presentó una propuesta de pago peor que la anterior (un día después de incumplir el pago de \$3500 pautado en un acta previa), los delegados nuevamente exigieron la aplicación de las

Trabajo: un silencio y una dilación cada vez más cercanos a la complicidad



La cartera laboral no define la entrega de los Repros para los trabajadores y se niega a informar detalles sobre la supuesta operación de venta de Tiempo Argentino que utilizaron para suspender las multas a G M Deluxe. Los tiempos y la paciencia se agotan.



multas a la patronal por parte del Estado tal como consta en el acta de la audiencia. La funcionaria Silvia Squire, por su parte, todavía no ha dado respuestas al pedido de Repros cuyo expediente fuera presentado hace ya más de un mes. Tampoco ha dado señales ciertas sobre la operación que la llevó a suspender la aplicación de las multas.

Mientras tanto la paciencia de los trabajadores y sus familias se va agotando. Más aún cuando, en conflictos actuales y de similares características como el de Sol líneas aéreas o Cresta Roja los trabajadores han obtenido recursos que permiten la percepción de los haberes completos en el primero caso y los Repro por \$6000 en el segundo mientras

se busca una solución de fondo. Los trabajadores del G23, que llevan sin cobrar el sueldo hace ya más de 80 días y permanecen en las instalaciones del diario Tiempo Argentino hace más 20 noches siguen sin percibir ni un peso. Ni desde las patronales vaciadoras ni desde el Estado. Se trata de una grave discriminación avalada por el poder político.

La asamblea de trabajadores evaluará, en los próximos días, las medidas necesarias para destrabar el pago de los Repro en forma urgente por un lado y, a su vez, exigir al Ministerio y a la empresa detalles (nombres) sobre la supuesta negociación en curso. El ministerio de trabajo está obligado a ofrecer una respuesta política ante la operación que

no se sustancia y a la que, ellos mismos, le dieron carácter oficial en el momento en que la usaron como excusa para no dar cumplimiento a sus deberes oficiales. Deberán demostrar fehacientemente que, su intervención, va a favor de una solución para los trabajadores y no en el sentido de encubrir a los vaciadores y desgastar la lucha en curso. «



Una nutrida columna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), conformada por trabajadores y trabajadoras de Tiempo Argentino, Radio América, Siete Días y Cielos Argentinos, entre otros medios del Grupo 23, como así también del resto del gremio periodístico, participó ayer de la movilización a Plaza de Mayo convocada junto con un paro de 24 horas por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), las centrales sindicales que conducen Hugo Yasky (CTA) y Pablo Micheli (CTA), sindicatos y entidades sociales contra los despidos en el Estado y la criminalización de la protesta social. Pese a la vigencia del protocolo anti piquete dispuesto por el gobierno nacional, la marcha partió al mediodía y bajo un calor agobiante de la esquina de Plaza de Mayo y 9 de Julio, avenidas por donde el tránsito estuvo cortado largo rato, pero también se observaron manifestantes que arribaban por las diagonales Norte y Sur. Carteles contra el ajuste, los despidos y la represión fueron los más vistos.

Según los organizadores la manifestación implicó unas 50 mil personas movilizadas de las distintas

El primer paro contra Macri tuvo una marcha masiva que colmó Plaza de Mayo



La movilización convocada por ATE Nacional fue una primera demostración de fuerza contra el ajuste del nuevo gobierno. Entre las columnas, estuvieron presentes el Sipreba y los trabajadores del Grupo 23.

juntas internas y agrupamientos de ATE; de sindicatos docentes como CTERA, SUTERBA y Conadu Histórica; del gremio aceitero, aeronáutico, auxiliares docentes, municipales, la Federación Judicial bonaerense, de la Salud y los señaleros ferroviarios de la línea del Rubén 'Pollo' Sobrero. También había partidos del Frente

de Izquierda como el PTS, PO e IS, así como Izquierda Revolucionaria (IR), el MAS, CCC y MST, entre otros espacios, donde también se pudo apreciar columnas del Frente para la Victoria. Los trabajadores de Tiempo Argentino, Radio América y otros medios del Grupo 23 marcharon detrás de la larga bandera que

exige "No al vaciamiento del Grupo 23" y otras por el pago de sueldos. Fernando "Tato" Dondero, secretario general del Sipreba, marchó junto a los dirigentes organizadores que luego hablaron en el escenario principal, montado contra el vallado que divide la plaza y evita avanzar hacia la Casa Rosada.

El primero en hablar fue el dirigente de ATE Nacional Hugo Godoy: "Le decimos al presidente Macri, a los gobernadores y a los intendentes que no vamos a permitir ningún despido más", señaló al tiempo que exigió terminar con "la precariedad laboral", lograr la recuperación de todos los trabajadores despedidos"



y tener "aumentos dignos". Godoy también advirtió: "Lanzamos un mensaje a la sociedad: modernización no son despidos, no son salarios de hambre ni precariedad laboral. Al Estado hay que construirlo más democráticamente, más solidariamente para ponerlo al servicio de las mayorías populares. Desde que asumió el gobierno, Macri produjo una devaluación que ya llega casi al 60%" y transfirió a los grupos exportadores 147.000 millones de pesos y 3.000.000 de dólares a las mineras para maximizar su rentabilidad". También adelantó más conflictos: "hoy somos 95 mil estatales precarizados en la administración pública nacional, 600 mil en las provincias y municipios. Hoy somos los trabajadores estatales, el 29 de febrero serán los auxiliares de educación y los docentes planteando el paro en todo el país para reclamar por sus derechos".

Además de la marcha a la Plaza de Mayo hubo otras manifestaciones en capitales y las principales ciudades de Santa Fe, Jujuy, Neuquén, Córdoba, Río Negro, la Rioja, Chubut, Entre Ríos y Santa Cruz, entre otras

provincias. La ATE informó que la mayor adhesión fue entre los trabajadores municipales, con un acatamiento cercano al 80%, entre nacionales, el 70%, y provinciales en torno al 50%.

Bien temprano, agrupaciones y partidos de izquierda cortaron la esquina de las avenidas Corrientes y Callao y luego de dos horas habilitaron un carril ante la presencia intimidatoria de la infantería de la Policía Federal y el temor general de actuar en el marco del Protocolo de Seguridad para evitar el corte de calles y rutas. Casi a la misma hora la Asociación de Trabajadores del Estado Desde Abajo, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentaron ante el juez penal Enrique Velázquez un habeas corpus colectivo para que se ordene al Poder Ejecutivo que se abstenga de realizar detenciones arbitrarias o poner en peligro la integridad física o la vida de los manifestantes. Por fortuna no hubo represión ni incidentes en ningún momento de la jornada nacional de lucha. «

PAROENRADIOAMERICA
NOALVACIAMIENTODELG23

RADIO ABIERTA

VENI A PARTICIPAR DE LAS CHARLAS EN VIVO CON :

LALO MIR

ANDY KUSNETZOFF

JUEVES 25
17:30 hs

AMENABAR 23
(Y DORREGO)

RADIO
AM 1190
AMERICA

SiPreBA
Sindicato de Periodistas y Comunicadores

INTERRADIAL
Trabajadores de Prensa Radial

TRABAJADORES
GRUPO
VEINTITRES

Podés colaborar con donaciones de alimentos no perecederos y pañales para el fondo de lucha

“Parece bastante ostensible cuál es el paradigma del rol que –no sólo en relación a los medios– el Estado prevé asignarse a sí mismo en términos de redistribución de bienes en general. Plantear que está en un proceso de ajuste es al menos una media mentira, ni siquiera una media verdad: lo que hay es una contumaz reasignación de recursos. Si uno le saca al Estado la plata de las retenciones a la renta agraria y a la renta minera, sólo por citar dos ejemplos, eso sólo se recompone con aumento de impuestos, con quita de subsidios, con endeudamiento y con despidos”, decía ayer Damián Loreti en la redacción de Por Más Tiempo, cuando aún no había cesado el estrépito de los tambores de la movilización a Plaza de Mayo en contra de los despidos en la administración pública. Abogado y docente, representante y agudo consejero de los trabajadores en numerosas luchas contra las patronales de la comunicación, Loreti fue uno de los principales impulsores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Junto a él, Graciana Peñafort, también abogada especialista en Derecho a la Comunicación y redactora de la normativa sancionada en 2009 y cuyos artículos antimonopólicos acaba de derogar, vía DNU, el presidente Mauricio Macri. Ambos aceptaron la invitación de los trabajadores de Tiempo en lucha por el pago de sus salarios para, en una suerte de entrevista colectiva, reflexionar sobre la centralidad del proceso de vaciamiento del Grupo 23 en el actual contexto

"El Estado argentino acaba de resolver apartarse de los estándares del sistema interamericano en materia de libertad de expresión" (Loreti).

TIEMPO DE DIÁLOGO

“Hay un castigo a la línea editorial, que es la que construyeron los periodistas”



Convocados por los trabajadores de Tiempo, Damián Loreti y Graciana Peñafort, dos de los principales impulsores de la Ley de Medios, reflexionaron sobre la centralidad del proceso de vaciamiento del Grupo 23 en el contexto del asedio a la normativa que el gobierno de Macri procura dejar sin efecto.



de asedio a la Ley de Medios y recorte de la pluralidad de voces en los medios de comunicación.

Loreti: –Este proceso de reasignación de recursos también se da en los medios de comunicación, aunque de modo más explícito. Se dijo: esto es un negocio y vamos a ver qué hacemos con los más chicos. Y eso supone un paradigma en la política de medios que no se compadece con las obliga-

ciones de derechos humanos que tiene la Argentina. Porque hay un punto en que las políticas no son opinables. El Estado argentino acaba de resolver apartarse de los estándares del sistema interamericano en materia de libertad de expresión. Primero, con el decreto 267, volteando sin ninguna necesidad y ninguna urgencia las reglas de pluralismo y diversidad que existían. Porque ampliar la cantidad de medios

que cada cual puede acumular y facilitar la compra de medios con problemas de papeles no son cuestiones de necesidad y urgencia. Y luego estrangulando medios por vía de una retaliación, a mi criterio, basada en la propia situación del mercado y en sus líneas editoriales, lo cual es lo mismo que los defensores de los sectores hegemónicos planteaban en los juicios contra el Estado en la época de Cristina, diciendo que no ha-

bía razonabilidad para sacarle por completo el financiamiento a un medio. La propia Ley de Medios dice que la distribución de publicidad debe ser equitativa. Pero equitativa no significa basada en la tirada ni regida por las reglas del mercado.

Peñafort: –Me parece que la ausencia en este momento de publicidad oficial –salvo la campaña contra el dengue y el fenomenal financiamiento indirecto que significa para los

canales de aire privados la adjudicación de la transmisión de los partidos de fútbol más importantes– tiene que ver con un intento de disciplinar a los medios. De hecho es público que a algunos medios que están armando su programación llegan llamémoslas sugerencias de que determinadas personas o determinadas líneas editoriales no sean tan visibles o directamente no estén. Y eso en el contexto de una brutal trans-

ferencia de recursos de los sectores medios y bajos hacia los altos, que debe ser invisibilizada. Respecto al Grupo 23, creo que hay un castigo a la línea editorial que ha tenido todos estos años, que no es sólo la de su dueño sino también la que construyeron sus periodistas, que no tienen por qué recibir ese castigo. Por otra parte creo que el Grupo 23 tiene algunas cosas codiciadas por algunos, licencias de radio por ejemplo,



y frente a su evidente desguace la autoridad de aplicación – autoridad por cierto ilegal, pero ese es otro debate– se hace claramente la zonza. Hoy escuchamos que tal compró esto, que tal otro compró aquello, una suerte de Jack el Destripador de frecuencias que tienen un montón de laburantes, y esto va de la mano de la política de facilitar los despidos no sólo en el sector público sino también en el privado. La lección que están viendo todos los periodistas de la Argentina con ustedes es que si se quedan sin trabajo nadie los va a ayudar.

PMT: –Queríamos preguntarles cómo analizan el modo en que se pensó la construcción de una comunicación contrahegemónica, como se intentó hacer desde el kirchnerismo, y si no creen que, en parte, este conflicto es la secuela de esa modalidad, librada al arbitrio de empresarios inescrupulosos como Sergio Szpolski.

P: –Es más bien la secuela de cómo “no” se pensó. La gestión anterior cometió errores en materia de medios –demorar por años los concursos para los canales de tevé digital fue un enorme error–, y creo que también lo fue su comunicación muy centralizada. No creo en el circo del “queremos preguntar”, pero sí fue un error no permitir una mayor diversidad de voces. Y, por fin, creo que se confundió subsidio con pauta oficial. La pauta tiene que ver con la comunicación de los asuntos de gobierno. Hubo parvas en el fútbol: estaba perfecto que la gente se enterara del plan Pro.cre.ar y fuera

a averiguar. Eso no implica que vos uses la pauta oficial como subsidio indirecto de medios nuevos, medios emergentes, medios comunitarios, porque si lo hacés, podés comunicar mal. No es un buen esquema.

PMT: –Tiempo Argentino nació en el contexto de la sanción de la Ley de Medios y poniendo en la agenda temas que estaban vedados, como la apropiación de Papel Prensa. Entonces, otra vez, ¿por qué avanzar contra Clarín apostando a un empresario como Szpolski?

P: –El problema no era sólo lo Clarín sino, en general, todo el sistema de medios. Desde luego, el tema de Papel Pren-

"La gestión anterior cometió errores en materia de medios, y creo que también fue un error su comunicación muy centralizada" (Peñafo)

sa era crucial, un oligopolio fuertemente configurado que afectaba a muchos diarios, sobre todo del interior. Respecto de la figura de Szpolski, no creo que lo hayan ido a buscar; Szpolski vio una posibilidad y la aprovechó. Lo que me preocupa, lo que ha fallado en todo este tiempo, es el control de los temas societarios, y ahora, con todas estas transferencias que se están dando, como las de Radio América y Tiempo Argentino, y con el Estado sin el

rol que tenía con la Ley 26.522, rápidamente esas sociedades pueden convertirse en cáscaras vacías. Y en este contexto, estos tres meses de absoluta inacción del Estado no se deben a que “no saben qué hacer”. Yo estoy convencida de que, puntualmente, por una de las radios de este grupo, el interesado está muy vinculado al Estado. Todo el mundo cree que Martínez Rojas es un testaferro de Szpolski pero yo creo que viene por el lado del gobierno. A mí lo que me preocupa de este conflicto es que demuestra cuál va a ser la actitud del gobierno frente a los conflictos por empleo. Una no respuesta que viene con algo peor: un protocolo de seguridad que pretende regular la forma en que vos podés protestar porque hay un empresario que se borró y hace tres meses que no te pagan. Un Estado, además, que te revisa el Twitter, te revisa la línea editorial y en base a eso decide si vos tenés o no derecho a trabajar.

L: –Lo que queda claro es que la crisis de todo el grupo es funcional a lo que dice el ministro de Hacienda y Finanzas: las empresas subsidiadas por el Estado no tienen que existir. Ese es el disciplinamiento: quiere decir que no puede existir un medio que viva mayoritariamente de la pauta pública. No hay lugar en el mundo donde no haya mecanismos de subsidio al pluralismo si se quiere, claro, tener un panorama plural de medios. Donde eso no existe, los gobiernos son socios o son rehenes de los medios concentrados. «

Guantánamo: una espina que Obama no podría sacar

Casi los ocho años de sus dos mandatos le demandaron al presidente de EE UU, Barack Obama, dar un paso concreto para cerrar la cárcel de Guantánamo, promesa que hizo en su primera campaña presidencial de 2008. Con el envío al Congreso de un plan para cerrar “de una vez por todas” la ignominiosa prisión ubicada en una base estadounidense en Cuba, el mandatario pretende pagar una deuda pendiente, que incluye el traslado de casi 100 presuntos islamistas radicales a territorio nacional y que fue recibido con rechazo por la oposición republicana y duras críticas de una asociación de abogados.

De acuerdo al plan, de los 91 presos que alberga actualmente Guantánamo, un total de 35 serán enviados a terceros países “en los próximos meses”. En cuanto a los 56 restantes, 10 afrontan cargos o fueron declarados culpables en procesos ante comisiones militares y los demás son considerados demasiado peligrosos para salir en libertad o ser transferidos a un tercer país. Estos detenidos serían trasladados a una prisión en Estados Unidos cuya construcción podría demandar hasta 475 millones de dólares pero que implicará un ahorro anual de unos 180 millones en costos operativos.

“Este no es un plan para cerrar Guantánamo. El corazón del plan –mover a los detenidos que no han sido acusados por ningún crimen y que nunca lo serán a una prisión en Estados Unidos– no significa cerrar Guantánamo, sino que apenas la reubica en otro código postal”, sentenció en un comunicado el Centro de Derechos Constitucionales, una organización de Nueva York que defiende a varios detenidos. “La infamia de Guantánamo nunca fue el lugar donde está ubicada, sino su régimen inhumano y

ilegal de detención indefinida. Cerrar Guantánamo en sentido real significa poner fin a esa práctica”, agregó uno de sus abogados, Ibrahim Al Qatabi.

Esta cárcel –ubicada en una porción del territorio cubano, arrendado por Estados Unidos a principio del siglo XX–, no sólo se convirtió en uno de los símbolos de las torturas, los abusos y los crímenes cometidos durante el gobierno de George Bush y su llamada guerra contra el terrorismo, sino que además dejó al desnudo el doble discurso actual de la dirigencia política en Washington en materia de derechos humanos.

En tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que los republicanos interpondrán medidas legales para impedir el cierre de la cárcel. Ryan dijo a periodistas que la oposición, que controla ambas cámaras, tenía los votos para bloquear en el Congreso el plan de Obama.

Además, el líder republicano, segundo en la línea de sucesión presidencial, dijo que su partido estaba preparando su “recurso legal” para garantizar que la cárcel de presuntos islamistas radicales siga abierta y que los detenidos no sean transferidos a Estados Unidos.

Obama trata de cumplir la promesa que hizo durante su campaña electoral en 2008 de cerrar Guantánamo, argumentando que la prisión, abierta tras los ataques a las Torres Gemelas, de 2001, promovía el reclutamiento de combatientes para redes islamistas en todo el mundo y era criticada por países aliados.

Sin embargo, el presidente se topó con una fuerte oposición en el Congreso, donde los republicanos y algunos demócratas sostienen que no hay alternativa y no quieren que se traslade a esos presuntos islamistas radicales a Estados Unidos, ni siquiera a cárceles de máxima seguridad. «



Al igual que en años anteriores, Amnistía Internacional (AI) investigó durante 2015 la situación de los derechos humanos en 160 países. En el caso de la Argentina, alertaron por el panorama de las comunidades indígenas: actualmente ascienden a 200 los conflictos territoriales de pueblos originarios que permanecen sin resolución. Amnistía advirtió sobre los obstáculos que encuentran estas comunidades para acceder a sus derechos, establecidos en la Constitución, a sus tierras ancestrales y a participar en la gestión de sus recursos naturales. Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina, destacó: “Hace años que venimos advirtiendo sobre la necesidad de trabajar en el ámbito legislativo con leyes vinculadas a la reglamentación del derecho a la Consulta Previa Libre e Informada y a la propiedad comunitaria”.

La organización divide los tipos de reclamos en las áreas territorial, ambiental, violencia, desalojo, por personería jurídica, o por criminalización. Asesinatos impunes; petroleras o empresarios que avanzan en territorios de ellos; obras de infraestructura que los afectan, por ejemplo inundándolos. Un mapa general se puede apreciar en la web www.territorioindigena.com.ar.

Durante este año hubo, al menos, 17 casos nuevos. Entre ellos el informe destaca el sucedido en octubre, cuando Relmu Ñamku, líder de la comunidad mapuche Winkul Newen, en la provincia de Neuquén, fue procesada por cargos desproporcionados tras resistirse a un desalojo en su territorio ancestral. “Fue absuelta del cargo de intento de asesinato de una auxiliar de justicia. Era el primer proceso penal en la región que contaba con un jurado intercultural y con interpretación simultánea al mapuzungun, el idioma nativo del pueblo mapuche”, señala AI.

Aparte de un análisis individual de cada país, el informe incluye una mirada por regiones. Sobre Latinoamérica indicaron que los niveles de violencia letal “son extremadamente elevados”. En cuatro países (Brasil, Colombia, México y Venezuela) se cometen uno de cada cuatro homicidios a nivel mundial y “sólo 20 de cada 100 desembocaron en una condena”. A

pesar del discurso mediático sobre la inseguridad, ninguno de los cuatro países más violentos de la región en 2015 fue la Argentina.

En el caso de nuestro país, el informe critica que “hubo casos no resueltos de asesinatos violentos de mujeres transgénero” (Daiana Sacayán, Marcela Chocobar y Coty Olmos) y que además “en Argentina, las mujeres y las niñas se enfrentaban a obstáculos para acceder a un aborto legal”, subrayando la falta de un debate público sobre la despenalización y que “más de la mitad de las jurisdicciones carecían de protocolos hospitalarios ex-

Según Amnistía Internacional, ascienden a 200 los conflictos territoriales indígenas en Argentina



Amnistía Internacional presentó su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo y puso el foco en la situación de las comunidades indígenas en la Argentina.



haustivos que garantizaran el acceso a un aborto legal cuando el embarazo fuera resultado de una violación o cuando peligraran la vida o salud de la mujer o la niña”.

Alertaron por el retraso de la aplicación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y, como dato positivo, mencionaron la continuación de los procesos judiciales a personas sospechosas de cometer delitos durante la dictadura militar (1976 - 1983): “Se dictaron ocho nuevas sentencias condenatorias, lo que elevó a 142 la cifra total de condenados entre 2006 y 2015”. Sin embargo, alertaron que “apenas se avanzó” respecto a poner a disposición judicial a los presuntos responsables de estos crímenes que pertenecían a los ámbitos civil, empresarial y judicial. Y concluyeron, a modo de advertencia: “La organización considera que esta política que lleva ya varios años en nuestro país debe sostenerse y avanzar”. «

DATOS DE AMNISTIA A NIVEL MUNDIAL

En 2015, Amnistía Internacional investigó la situación de los derechos humanos en 160 países y territorios de todo el mundo.	esa situación.	víctimas de homicidio.	Unos 20 países (al menos cuatro en 2015) ya aprobaron leyes o proyectos de ley que reconocen el matrimonio u otras formas de relación entre personas del mismo sexo.
En al menos 113 países se restringió arbitrariamente la libertad de expresión y de prensa.	Al menos 30 países obligaron ilegalmente a personas refugiadas a volver a países donde correrían peligro.	En al menos 61 países se encarceló a presos y presas de conciencia, personas que no hacían más que ejercer sus derechos y libertades.	En al menos el 55 % de los países hubo juicios injustos. “En un juicio injusto no se imparte justicia ni a la persona acusada, ni a la víctima del delito, ni a la sociedad”, enfatizó Amnistía.
Había más de 60 millones de personas desplazadas de sus hogares en todo el mundo. Muchas de ellas llevaban varios años en	Los grupos armados cometieron abusos contra los derechos humanos en al menos 36 países.	En 122 países o más se infligió tortura u otros malos tratos.	
	Al menos 156 defensores y defensoras de los derechos humanos murieron en detención o fueron	En al menos 19 países se perpetraron crímenes de guerra u otras violaciones de las “leyes de la guerra”.	